

## Legislación Nacional

**LEY 25935 CONVENIOS INTERNACIONALES PROCEDIMIENTO JUDICIAL Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa Entre los Estados Parte del Mercosur y las Repúblicas de Bolivia y Chile. Aprobación sanc. 8/9/2004; promul. 30/9/2004; publ. 4/10/2004 El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso sancionan con fuerza de ley: Art. 1.º Apruébase el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados parte del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile, suscripto en Buenos Aires el 5 de julio de 2002, que consta de treinta y cinco (35) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley. Art. 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.** Ruckauf - lafer - Moreno Ruffinelli - Operti - Fernández Saavedra - Alvear Valenzuela **Anexo ACUERDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA JURISDICCIONAL EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA Y LA REPÚBLICA DE CHILE** La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, Estados parte del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la República de Bolivia y la República de Chile, todas denominadas en lo sucesivo “Estados parte” a los efectos del presente acuerdo; Considerando el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa aprobado en el Valle de Las Leñas, República Argentina, por decisión 5/1992 del Consejo del Mercado Común, vigente en los cuatro Estados parte del Mercosur; Teniendo en cuenta el acuerdo de complementación económica 36 firmado entre el Mercosur y la República de Bolivia; el acuerdo de complementación económica 35 suscripto entre el Mercosur y la República de Chile y las decisiones del Consejo del Mercado Común (C.M.C.) 14/1996 “Participación de terceros países asociados en reuniones del Mercosur” y 12/1997 “Participación de Chile en reuniones del Mercosur”; Reafirmando la voluntad de acordar soluciones jurídicas comunes con el objeto de fortalecer el proceso de integración; Deseosos de promover e intensificar la cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa, a fin de contribuir de este modo al desarrollo de sus relaciones de integración sobre la base de los principios de respeto a la soberanía nacional y a la igualdad de derechos e intereses recíprocos; Convencidos de que este acuerdo coadyuvará al trato equitativo de los nacionales, ciudadanos y residentes permanentes o habituales de los Estados parte del Mercosur y de la República de Bolivia y de la República de Chile y les facilitará el libre acceso a la jurisdicción en dichos Estados para la defensa de sus derechos e intereses; Conscientes de la importancia que reviste para el proceso de integración la adopción de instrumentos comunes que consoliden la seguridad jurídica; **Acuerdan: CAPÍTULO I: COOPERACIÓN Y ASISTENCIA JURISDICCIONAL** Art. 1.- Los Estados parte se comprometen a prestarse asistencia mutua y amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa. La asistencia jurisdiccional en materia administrativa se referirá, según el derecho interno de cada Estado, a los procedimientos contencioso-administrativos en los que se admitan recursos ante los tribunales. **CAPÍTULO II: AUTORIDADES CENTRALES** Art. 2.- A los efectos del presente acuerdo, los Estados parte designarán una autoridad central encargada de recibir y tramitar pedidos de asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa. A tal fin, dichas autoridades centrales se comunicarán directamente entre ellas, dando intervención a las respectivas autoridades competentes, cuando sea necesario. Los Estados parte, al depositar el instrumento de ratificación del presente acuerdo, comunicarán dicha designación al Gobierno depositario, el cual lo pondrá en conocimiento de los demás Estados. La autoridad central podrá ser cambiada en cualquier momento, debiendo el Estado respectivo comunicarlo en el menor tiempo posible al Gobierno depositario del presente acuerdo, a fin de que ponga en conocimiento de los demás Estados parte el cambio efectuado. **CAPÍTULO III: IGUALDAD DE TRATO PROCESAL** Art. 3.- Los nacionales, ciudadanos y residentes permanentes o habituales de uno de los Estados parte gozarán, en las mismas condiciones que los nacionales, ciudadanos y residentes permanentes o habituales de otro Estado parte, del libre acceso a la jurisdicción en dicho Estado para la defensa de sus derechos e intereses. El párrafo precedente se aplicará a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de cualquiera de los Estados parte. Art. 4.- Ninguna caución o depósito, cualquiera sea su denominación, podrá ser impuesta en razón de la calidad de nacional, ciudadano o residente permanente o habitual de otro Estado parte. El párrafo precedente se aplicará a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de cualquiera de los Estados parte. **CAPÍTULO IV: COOPERACIÓN EN ACTIVIDADES DE MERO TRÁMITE Y PROBATORIAS** Art. 5.- Cada Estado parte deberá enviar a las autoridades jurisdiccionales del otro Estado parte, según las vías previstas en los arts. 2 y 10, los exhortos en materia civil, comercial, laboral o administrativa, cuando tengan por objeto: a) Diligencias de mero trámite, tales como citaciones, intimaciones o apercibimientos, emplazamientos, notificaciones u otras semejantes; b) Recepción u obtención de pruebas. Art. 6.- Los exhortos deberán contener: a) Denominación y domicilio del órgano jurisdiccional requirente; b) Individualización del expediente con especificación del objeto y naturaleza del juicio y del nombre y domicilio de las partes; c) Copia de la demanda y transcripción de la

resolución que ordena la expedición del exhorto;d) Nombre y domicilio del apoderado de la parte solicitante en el Estado requerido, si lo hubiere;e) Indicación del objeto del exhorto precisando el nombre y domicilio del destinatario de la medida;f) Información del plazo de que dispone la persona afectada por la medida para cumplirla;g) Descripción de las formas o procedimientos especiales con que ha de cumplirse la cooperación solicitada;h) Cualquier otra información que facilite el cumplimiento del exhorto.Art. 7.- Si se solicitare la recepción de pruebas, el exhorto deberá, además, contener:a) Una descripción del asunto que facilite la diligencia probatoria;b) Nombre y domicilio de testigos u otras personas o instituciones que deban intervenir;c) Texto de los interrogatorios y documentos necesarios.Art. 8.- El cumplimiento de los exhortos deberá ser diligenciado de oficio por la autoridad jurisdiccional competente del Estado requerido y sólo podrá denegarse cuando la medida solicitada, por su naturaleza, atente contra los principios de orden público del Estado requerido.Dicho cumplimiento no implicará un reconocimiento de la jurisdicción internacional del juez del cual emana.Art. 9.- La autoridad jurisdiccional requerida tendrá competencia para conocer de las cuestiones que se susciten con motivo del cumplimiento de la diligencia solicitada.Si la autoridad jurisdiccional requerida se declarare incompetente para proceder a la tramitación del exhorto, remitirá de oficio los documentos y antecedentes del caso a la autoridad jurisdiccional competente de su Estado.Art. 10.- Los exhortos podrán ser transmitidos por vía diplomática o consular, por intermedio de la respectiva autoridad central o por las partes interesadas, conforme al derecho interno.Si la transmisión del exhorto fuere efectuada por intermedio de las autoridades centrales o por vía diplomática o consular, no se exigirá el requisito de la legalización.Si se transmitiere por intermedio de la parte interesada, deberá ser legalizado ante los agentes diplomáticos o consulares del Estado requerido, salvo que entre los Estados requirente y requerido se hubiere suprimido el requisito de la legalización o sustituido por otra formalidad.Los exhortos y los documentos que los acompañen deberán redactarse en el idioma de la autoridad requirente y ser acompañados de una traducción al idioma de la autoridad requerida.Art. 11.- La autoridad requirente podrá solicitar de la autoridad requerida se le informe el lugar y la fecha en que la medida solicitada se hará efectiva, a fin de permitir que la autoridad requirente, las partes interesadas o sus respectivos representantes, puedan comparecer y ejercer las facultades autorizadas por la legislación de la parte requerida.Dicha comunicación deberá efectuarse con la debida antelación por intermedio de las autoridades centrales de los Estados parte.Art. 12.- La autoridad jurisdiccional encargada del cumplimiento de un exhorto aplicará su ley interna en lo que a los procedimientos se refiere.Sin embargo, podrá accederse, a solicitud de la autoridad requirente, a otorgar al exhorto una tramitación especial o aceptarse el cumplimiento de formalidades adicionales en la diligencia del exhorto, siempre que ello no sea incompatible con el orden público del Estado requerido.El cumplimiento del exhorto deberá llevarse a cabo sin demora.Art. 13.- Al diligenciar el exhorto, la autoridad requerida aplicará las medidas coercitivas previstas en su legislación interna, en los casos y en la medida en que deba hacerlo para cumplir un exhorto de las autoridades de su propio Estado o un pedido presentado a este efecto por una parte interesada.Art. 14.- Los documentos en los que conste el cumplimiento del exhorto serán devueltos por los medios y en la forma prevista en el art. 10.Cuando el exhorto no haya sido cumplido en todo o en parte, este hecho, así como las razones que determinaron el incumplimiento, deberán ser comunicados de inmediato a la autoridad requirente, utilizando los medios referidos en el párrafo precedente.Art. 15.- El cumplimiento del exhorto no podrá dar lugar al reembolso de ningún tipo de gasto, excepto cuando se soliciten medios probatorios que ocasionen erogaciones especiales o se designen profesionales para intervenir en el diligenciamiento.En tales casos, se deberá consignar en el cuerpo del exhorto los datos de la persona que en el Estado requerido procederá a dar cumplimiento al pago de los gastos y honorarios devengados.Art. 16.- Cuando los datos relativos al domicilio del destinatario del acto o de la persona citada estén incompletos o sean inexactos, la autoridad requerida deberá agotar todos los medios para satisfacer el pedido. Al efecto, podrá también solicitar al Estado requirente los datos complementarios que permitan la identificación y la localización de la referida persona.Art. 17.- Los trámites pertinentes para hacer efectivo el cumplimiento del exhorto no requerirán necesariamente la intervención de parte interesada, debiendo ser practicados de oficio por la autoridad jurisdiccional competente del Estado requerido.**CAPÍTULO V:RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓNDE SENTENCIAS Y LAUDOS ARBITRALES**Art. 18.- Las disposiciones del presente capítulo serán aplicables al reconocimiento y ejecución de las sentencias y de los laudos arbitrales pronunciados en las jurisdicciones de los Estados parte en materia civil, comercial, laboral y administrativa. Las mismas serán igualmente aplicables a las sentencias en materia de reparación de daños y restitución de bienes pronunciadas en jurisdicción penal.Art. 19.- El reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales solicitado por las autoridades jurisdiccionales podrá tramitarse por vía de exhortos y transmitirse por intermedio de la autoridad central o por conducto diplomático o consular, conforme al derecho interno.No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la parte interesada podrá tramitar directamente el reconocimiento o ejecución de la sentencia. En tal caso, la sentencia deberá estar debidamente legalizada de acuerdo con la legislación del Estado en que se pretenda su eficacia, salvo que entre el Estado de origen del fallo y el Estado donde es invocado, se hubiere suprimido el requisito de la legalización o sustituido por otra formalidad.Art. 20.- Las sentencias y los laudos arbitrales a que se refiere el artículo precedente, tendrán eficacia extraterritorial en los Estados parte si reúnen las siguientes

condiciones:a) Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado en el que se solicita su reconocimiento y ejecución;b) Que éstos y los documentos anexos que fueren necesarios, estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado en el que se solicita su reconocimiento y ejecución;c) Que éstos emanen de un órgano jurisdiccional o arbitral competente, según las normas del Estado requerido sobre jurisdicción internacional;d) Que la parte contra la que se pretende ejecutar la decisión haya sido debidamente citada y se haya garantizado el ejercicio de su derecho de defensa;e) Que la decisión tenga fuerza de cosa juzgada y/o ejecutoria en el Estado en el que fue dictada;f) Que no contraríen manifiestamente los principios de orden público del Estado en el que se solicitare el reconocimiento y/o la ejecución.Los requisitos de los literales a), c), d), e) y f) deben surgir del testimonio de la sentencia o del laudo arbitral.Art. 21.- La parte que en un juicio invoque una sentencia o un laudo arbitral de alguno de los Estados parte, deberá acompañar un testimonio de la sentencia o del laudo arbitral con los requisitos del artículo precedente.Art. 22.- Cuando se tratase de una sentencia o de un laudo arbitral entre las mismas partes, fundado en los mismos hechos y que tuviere el mismo objeto que el de otro proceso jurisdiccional o arbitral en el Estado requerido, su reconocimiento y ejecutoriedad dependerán de que la decisión no sea incompatible con otro pronunciamiento anterior o simultáneo recaído en tal proceso en el Estado requerido.Asimismo, no se reconocerá ni se procederá a la ejecución, cuando se hubiere iniciado un procedimiento entre las mismas partes, fundado en los mismos hechos y sobre el mismo objeto, ante cualquier autoridad jurisdiccional del Estado requerido con anterioridad a la presentación de la demanda ante la autoridad jurisdiccional que hubiere pronunciado la resolución de la que se solicite el reconocimiento.Art. 23.- Si una sentencia o un laudo arbitral no pudiese tener eficacia en su totalidad, la autoridad jurisdiccional competente en el Estado requerido podrá admitir su eficacia parcial mediando solicitud de parte interesada.Art. 24.- Los procedimientos, incluso la competencia de los respectivos órganos jurisdiccionales, a los efectos de reconocimiento y ejecución de las sentencias o de los laudos arbitrales, se regirán por la ley del Estado requerido.

**CAPÍTULO VI:DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y OTROS DOCUMENTOS**Art. 25.- Los instrumentos públicos emanados de un Estado parte tendrán en los otros la misma fuerza probatoria que sus propios instrumentos públicos.Art. 26.- Los documentos emanados de autoridades jurisdiccionales u otras autoridades de uno de los Estados parte, así como las escrituras públicas y los documentos que certifiquen la validez, la fecha y la veracidad de la firma o la conformidad con el original, que sean transmitidos por intermedio de la autoridad central, quedan exceptuados de toda legalización, apostilla u otra formalidad análoga cuando deban ser presentados en el territorio de otro Estado parte.Art. 27.- Cada Estado parte remitirá, a través de la autoridad central, a solicitud de otro Estado y para fines exclusivamente públicos, los testimonios o certificados de las actas de los registros de estado civil, sin cargo alguno.

**CAPÍTULO VII:INFORMACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO**Art. 28.- Las autoridades centrales de los Estados parte se suministrarán, en concepto de cooperación judicial, y siempre que no se opongan a las disposiciones de su orden público, informes en materia civil, comercial, laboral, administrativa y de derecho internacional privado, sin gasto alguno.Art. 29.- La información a que se refiere el artículo anterior podrá también obtenerse a través de informes suministrados por las autoridades diplomáticas o consulares del Estado parte de cuyo derecho se trate.Art. 30.- El Estado parte que brinde los informes sobre el sentido y alcance legal de su derecho, no será responsable por la opinión emitida ni estará obligado a aplicar su derecho según la respuesta proporcionada.El Estado parte que reciba dichos informes no estará obligado a aplicar o hacer aplicar el derecho extranjero según el contenido de la respuesta recibida.

**CAPÍTULO VIII:CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**Art. 31.- Las autoridades centrales de los Estados parte celebrarán consultas en las oportunidades que convengan mutuamente con el fin de facilitar la aplicación del presente acuerdo.Art. 32.- Los Estados parte en caso de controversia sobre la interpretación, la aplicación o el incumplimiento de las disposiciones de este acuerdo, procurarán resolverla mediante negociaciones diplomáticas directas.

**CAPÍTULO IX:DISPOSICIONES FINALES**Art. 33.- El presente acuerdo no restringirá las disposiciones de las convenciones que sobre la misma materia, hubieran sido suscriptas anteriormente entre los Estados parte, en tanto sean más beneficiosas para la cooperación.Art. 34.- El presente acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de que hayan sido depositados los instrumentos de ratificación por dos Estados parte del Mercosur y la República de Bolivia o la República de Chile.Para los demás signatarios, entrará en vigor el trigésimo día posterior al depósito de su respectivo instrumento de ratificación.Art. 35.- El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente acuerdo y de los instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los Gobiernos de los demás Estados parte.El Gobierno de la República del Paraguay notificará a los Gobiernos de los demás Estados parte la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo y la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación.Hecho en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a los cinco (5) días del mes de julio de 2002, en un ejemplar original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.